



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

XV LEGISLATURA

Serie B:
PROPOSICIONES DE LEY

13 de marzo de 2026

Núm. 313-1

Pág. 1

PROPOSICIÓN DE LEY

122/000262 Proposición de Ley para la constitución de un consorcio de inversiones entre la Administración General del Estado y la Generalitat de Cataluña.

Presentada por el Grupo Parlamentario Republicano.

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(122) Proposición de ley de Grupos Parlamentarios del Congreso.

Autor: Grupo Parlamentario Republicano

Proposición de Ley para la constitución de un consorcio de inversiones entre la Administración General del Estado y la Generalitat de Cataluña.

Acuerdo:

Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2026.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, **Fernando Galindo Elola-Olaso**.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Portavoz Gabriel Rufián Romero, al amparo de lo establecido en el artículo 124 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición de Ley para la constitución de un consorcio de inversiones entre la Administración General del Estado y la Generalitat de Catalunya, para su debate en Pleno.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2026.—**Gabriel Rufián Romero**, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.

PROPOSICIÓN DE LEY PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN CONSORCIO DE
INVERSIONES ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y LA
GENERALITAT DE CATALUÑA

Exposición de motivos

La inversión en infraestructuras es una de las políticas públicas más trascendentes en términos de creación de valor y bienestar social, siendo un elemento tractor en la medida que incide en el crecimiento económico y, por tanto, permite el fortalecimiento del Estado del bienestar a partir de una correcta redistribución de la riqueza; y en la medida que sostiene la infraestructura sobre la que operan el resto de actores económicos y sociales, permitiendo un correcto desarrollo de la actividad económica y social del país.

Desde hace décadas la ciudadanía de Catalunya viene denunciando las consecuencias de una política de inversiones en infraestructuras inadecuada e insuficiente por parte de la Administración General del Estado. La falta de inversión, conservación y mantenimiento en algunas de las principales infraestructuras de titularidad estatal se ha puesto de manifiesto de forma notoria en las primeras semanas del 2026 con la gravísima crisis del servicio ferroviario de «Rodalies», pero también con los problemas derivados de la falta de mantenimiento y conservación adecuados de la autopista del Mediterráneo (AP7), eje que vertebra de norte a sur el territorio catalán. En ambos casos se trata de déficits de inversión y deficiencias estructurales de carácter recurrente, cuyas consecuencias inciden no sólo en la movilidad cotidiana y la calidad de vida de gran parte de la población catalana, sino que lastran la capacidad productiva y la competitividad de la economía catalana.

Ejemplos de esta situación son la baja ejecución de los planes de inversión en «Rodalies» entre 2000 y 2020 (con la línea R1 desprotegida de los temporales y la erosión del litoral), el hecho de que entre Barcelona y la frontera francesa la alta velocidad comparte vía con el transporte de mercancías, los accesos ferroviarios al Port de Barcelona están en trámite desde el 2002 y todavía no se ha iniciado su construcción, la mayoría de las terminales aeroportuarias no están conectadas todavía mediante ferrocarril, la conexión ferroviaria entre Tarragona-Lleida-Zaragoza dispone de una sola vía de un único sentido, la capacidad de la AP-7 entre Tarragona y Castelló es claramente insuficiente, el eje viario del Pirineo (N-260) está lejos de los estándares actuales, así como la conexión ferroviaria entre Barcelona y València, la segunda y tercera ciudades del Estado en términos de población, no llega ni a velocidad media.

Los graves problemas aflorados recientemente, que sería erróneo atribuir a los actuales responsables políticos y técnicos, son el resultado de décadas de una cuestionable priorización de las inversiones y una deficiente planificación, ejecución y gestión de las infraestructuras que en un contexto de emergencia climática se han evidenciado como elementos críticos. Las graves afectaciones sobre las infraestructuras de los cada vez más frecuentes episodios climáticos adversos obligan a un proceso de revisión y adaptación urgente de las mismas.

En el año 2022, conscientes de esta problemática, el Ministerio de Transportes y la Administración de la Generalitat de Catalunya impulsaron la vía de las encomiendas de gestión como instrumento de cooperación entre ambas administraciones para acelerar la ejecución de diversas mejoras en la red de carreteras y en la red ferroviaria. Como consecuencia de la lentitud administrativa se retrasó hasta finales de 2024 la firma de los convenios administrativos que debían formalizar dicha cooperación, encontrándonos aún en fase de licitación de los estudios preliminares de dichos proyectos de obra y habiendo quedado desfasadas las cuantías inicialmente previstas en las encomiendas de gestión para su ejecución.

En un marco como el actual, de creciente exigencia y complejidad, tanto en términos de desafíos a afrontar como de soluciones a adoptar, la colaboración entre las Administraciones Públicas y el impulso de instrumentos innovadores de mayor proximidad a la ciudadanía se erigen en elementos fundamentales en aras de la satisfacción del

interés general. En este sentido, el ordenamiento jurídico establece los instrumentos que permiten canalizar la colaboración entre Administraciones Públicas, permitiendo así la creación de espacios de decisión y gestión compartidas mediante la constitución de personificaciones instrumentales del sector público -como los consorcios-.

Por todas estas consideraciones, la Comisión Bilateral Generalitat-Estado del 24 de febrero de 2025 instó a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales a crear un grupo de trabajo al que se encargaba el análisis de la creación de un consorcio paritario Estado-Generalitat de Catalunya en materia de inversiones.

Esta proposición de ley tiene por objeto acelerar la creación de dicho consorcio en materia de inversiones, permitiendo que el impulso, planificación, seguimiento, gestión y ejecución de las principales infraestructuras del Estado se realice de forma conjunta con la Generalitat de Catalunya, y permitiendo una gestión de éstas más ágil, más directa, más próxima al territorio y más acorde con las necesidades de sus habitantes.

El primer plano se atribuye al «Consorti d'Inversions de Catalunya», al que corresponde la elaboración del Plan Plurianual de Inversiones y de los programas que lo desarrollen, así como el seguimiento, evaluación y coordinación de las actuaciones inversoras del sector público estatal en el territorio. Se configura fundamentalmente, de este modo, como un instrumento de gobernanza, dirección estratégica y supervisión.

El segundo plano, referido a la ejecución de estudios, proyectos, obras y demás actuaciones materiales, podrá encomendarse a una Sociedad Mercantil integrada en el sector público empresarial estatal y participada por la Administración General del Estado y la Generalitat de Catalunya. La opción por esta fórmula societaria responde a la necesidad de disponer de un instrumento de gestión dotado de mayor agilidad, flexibilidad y capacidad operativa para el desarrollo de actuaciones de inversión. Dicha Sociedad tendrá la condición de medio propio personificado y servicio técnico de las administraciones participantes.

Consideramos que, mediante el consorcio y la sociedad mercantil, paritarios entre las dos administraciones, a medio plazo pueden resolverse algunas de las causas antes descritas, causas que no son seguramente exclusivas de Catalunya, por lo cual, la propuesta que deriva de esta proposición de ley puede ser replicada en otros territorios del Estado en los cuales se considere oportuno impulsar una iniciativa similar.

La propuesta pretende en primer lugar dar cumplimiento al requisito establecido por el artículo 123 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, según el cual para la creación de consorcios en los que participe la Administración General del Estado o sus organismos públicos y entidades vinculados o dependientes se requerirá que su creación se autorice por ley.

Artículo 1. *Autorización para la constitución del «Consorti d'Inversions de Catalunya».*

Se autoriza la creación del «Consorti d'Inversions de Catalunya» para el impulso, planificación, seguimiento, gestión y ejecución de las inversiones del Estado en Catalunya.

Artículo 2. *Régimen jurídico del consorcio.*

El consorcio que se constituya se regulará por lo dispuesto en el capítulo VI del título II de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por sus estatutos y demás normas que le sean de aplicación y le serán de aplicación los siguientes criterios:

1. Contará con la participación de la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y de la Administración de la Generalitat de Catalunya.

2. Estará adscrito a la Administración General del Estado, en virtud de lo dispuesto en el apartado 2.f) del artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

3. Tendrá la consideración de medio propio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Artículo 3. *Funciones.*

El «Consorti d'Inversions de Catalunya», en los términos previstos en sus estatutos, ejercerá, al menos, las siguientes funciones, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos según la normativa vigente:

- a) Elaborar el proyecto de Plan Plurianual de Inversiones del Estado en Catalunya, con carácter previo a su elevación al Consejo de Ministros para su aprobación.
- b) Elaborar los proyectos de programas anuales y, en su caso, sectoriales de inversión mediante los cuales se desarrolle y ejecute el Plan Plurianual.
- c) Realizar el seguimiento, control y evaluación de las políticas y actuaciones de inversión de la Administración General del Estado en Catalunya, en particular de aquellas incluidas en los instrumentos de planificación previstos en las letras anteriores.
- d) Impulsar las medidas correctoras oportunas y reprogramar nuevas actuaciones en caso de que los niveles y plazos de ejecución de las inversiones en curso no sean los acordados.
- e) Coordinar la actuación de las entidades integrantes del sector público estatal, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que ejecuten inversiones del Estado en el ámbito territorial de Catalunya.
- f) Participar, a través de miembros de su Consejo Rector designados al efecto, en los Consejos de Administración de las principales entidades estatales que ejecuten inversiones en Catalunya.
- g) Impulsar y promover la constitución de la sociedad mercantil prevista en el artículo 6 de la presente Ley, así como colaborar en su puesta en funcionamiento.
- h) Elaborar informes, estudios y propuestas en materia de planificación, programación y ejecución de inversiones estatales en Catalunya.

Artículo 4. *Régimen presupuestario, de contabilidad y de control financiero.*

1. El régimen presupuestario, de contabilidad y de control del Consorcio será el establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y su normativa de desarrollo, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El plan contable de aplicación será el Plan General de Contabilidad Pública.

2. El Consorcio estará sujeto al control externo del Tribunal de Cuentas y al control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado a través de las modalidades de control que resulten de aplicación al Consorcio de conformidad con la Ley General Presupuestaria.

3. El Consorcio estará sometido a la supervisión continua, ejercida por el Ministerio de Hacienda a través de la Intervención General de la Administración del Estado de acuerdo con lo establecido en el artículo 85.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Artículo 5. *Los estatutos del consorcio y su duración.*

1. Los estatutos que aprueben los órganos de gobierno de las administraciones consorciadas determinarán la composición, régimen de toma de acuerdos de los órganos de gobierno del Consorcio, su financiación, estructura, régimen de personal y demás requisitos legalmente establecidos.

2. La duración del consorcio será indefinida.

Artículo 6. *Sociedad Mercantil de Inversiones de Catalunya.*

1. La Sociedad Mercantil de Inversiones de Catalunya tendrá por objeto la realización, por encargo, de estudios, la redacción de proyectos, la ejecución de obras, la

prestación de suministros y servicios, así como cualesquiera otras actuaciones materiales necesarias para la ejecución de inversiones del Estado en Catalunya que le sean encomendadas por la Administración General del Estado, por las entidades competentes del sector público estatal o por el Consorci d'Inversions de Catalunya.

2. La Sociedad tendrá la condición de medio propio personificado y servicio técnico de la Administración General del Estado, del resto de entidades integrantes del sector público estatal, de la Generalitat de Catalunya y del Consorci d'Inversions de Catalunya.

3. Las relaciones entre la Sociedad y las entidades respecto de las cuales tenga la condición de medio propio se articularán mediante los encargos regulados en los artículos 32 y 33 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

4. El capital social pertenecerá a la Administración General del Estado y a la Generalitat de Catalunya, en las proporciones que se determinen en los estatutos sociales, garantizando en todo caso la participación mayoritaria del sector público estatal y la integración de la Sociedad en el sector público empresarial estatal.

5. En el momento de su constitución, la Administración del Estado y la Generalitat de Catalunya acordarán el régimen de gobernanza de la Sociedad, que se desarrollará en los estatutos sociales y, en su caso, en el correspondiente pacto de socios.

Artículo 7. Sostenimiento económico y financiación del Consorcio y la Sociedad Mercantil de Inversiones.

El sostenimiento económico del Consorcio y la Sociedad Mercantil de Inversiones, así como la financiación de sus actividades, corresponderá únicamente a la Administración General del Estado, sin perjuicio de los ingresos derivados de las encomiendas y de los encargos que se formalicen con las entidades del sector público estatal. A estos efectos, corresponde a la Administración General del Estado realizar las aportaciones dinerarias y no dinerarias que correspondan.

Disposición adicional primera. Régimen de autorizaciones.

Se autoriza al Gobierno para que apruebe las disposiciones, que sean necesarias para la efectividad de la presente proposición de ley y en especial las que permitan al Consorcio ejercer funciones de coordinación de las entidades estatales que, sea cual sea su forma jurídica, realicen y ejecuten inversiones en Catalunya. Asimismo, el Gobierno deberá adoptar decisiones de carácter administrativo que sean necesarias para el correcto funcionamiento del consorcio.

Disposición adicional segunda. Plazo de constitución.

En el plazo de nueve meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley, deberá estar constituido el Consorci d'Inversions de Catalunya, que en todo caso deberá iniciar su actividad a partir del 1 de enero de 2027.

En el plazo de doce meses a partir del inicio de la actividad del Consorcio, deberá estar constituida la Sociedad Mercantil d'Inversions de Catalunya.

Disposición adicional tercera. Participación en entidades estatales.

En el plazo de tres meses desde la constitución del Consorcio, el Gobierno adoptará las medidas necesarias para garantizar la incorporación de un representante del Consorci d'Inversions de Catalunya al Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

Disposición final.

La presente proposición de ley entrará en vigor a partir de los veinte días siguientes al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

A la Mesa del Congrés dels Diputats.

El Grup Parlamentari Republicà, a instància del Diputat Gabriel Rufián Romero, a l'empara del que s'estableix en l'article 124 i següents del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició de Llei per a la constitució d'un consorci d'inversions entre l'Administració General de l'Estat i la Generalitat de Catalunya, pel seu debat en Ple.

Congrés dels Diputats, a 27 de febrer de 2026.—**Gabriel Rufián Romero**, Portaveu GP Republicà.

PROPOSICIÓ DE LLEI PER A LA CONSTITUCIÓ D'UN CONSORCI D'INVERSIONS
ENTRE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT I LA GENERALITAT
DE CATALUNYA

Exposició de motius

La inversió en infraestructures és una de les polítiques públiques més transcendents en termes de creació de valor i benestar social, sent un element tractor en la mesura que incideix en el creixement econòmic i, per tant, permet l'enfortiment de l'Estat del benestar a partir d'una correcta redistribució de la riquesa; i en la mesura que sosté la infraestructura sobre la qual operen actors econòmics i socials, permetent un correcte desenvolupament de l'activitat econòmica i social del país.

Des de fa dècades, la ciutadania de Catalunya ve denunciant les conseqüències d'una política d'inversions en infraestructures inadequada i insuficient per part de l'Administració General de l'Estat. La manca d'inversió, conservació i manteniment en algunes de les principals infraestructures de titularitat estatal s'ha posat de manifest de forma notòria en les primeres setmanes del 2026 amb la gravíssima crisi del servei ferroviari de «Rodalies», però també amb els problemes derivats de la falta de manteniment i conservació adequats de l'autopista del Mediterrani (AP-7), eix que vertebrava de nord a sud el territori català. En ambdós casos es tracta de déficits d'inversió i deficiències estructurals de caràcter recurrent, les conseqüències dels quals incideixen no només en la mobilitat quotidiana i la qualitat de vida de gran part de la població catalana, sinó que llastren la capacitat productiva i la competitivitat de l'economia catalana.

Exemples d'aquesta situació són la baixa execució dels plans d'inversió en Rodalies entre 2000 i 2020 (amb la línia R1 desprotegida dels temporals i l'erosió del litoral), el fet que entre Barcelona i la frontera francesa l'alta velocitat comparteixi via amb el transport de mercaderies, els accessos ferroviaris al Port de Barcelona, en tràmit des del 2002 i dels quals no s'ha iniciat encara la construcció, la falta de connexió ferroviària entre la majoria de les terminals aeroportuàries, l'existència d'una sola via d'un únic sentit en la connexió ferroviària entre Tarragona-Lleida-Saragossa, la capacitat clarament insuficient de l'AP-7 entre Tarragona i Castelló, l'estat de l'eix viari del Pirineu (N-260), lluny dels estàndards actuals, així com la connexió ferroviària entre Barcelona i València, la segona i tercera ciutat de l'Estat en termes de població, que no arriba ni a velocitat mitjana.

Els greus problemes aflorats recentment, que seria erroni atribuir als actuals responsables polítics i tècnics, són el resultat de dècades d'una qüestionable prioritització de les inversions i una deficient planificació, execució i gestió de les infraestructures que en un context d'emergència climàtica s'han evidenciat com a elements crítics. Les greus afectacions sobre les infraestructures dels cada vegada més freqüents episodis climàtics adversos obliguen a un procés de revisió i adaptació urgent.

L'any 2022, conscients d'aquesta problemàtica, el Ministeri de Transports i l'Administració de la Generalitat de Catalunya van impulsar la via de les encomanes de gestió com a instrument de cooperació entre ambdues administracions per a accelerar l'execució de diverses millores en la xarxa de carreteres i la xarxa ferroviària. Com a

conseqüència de la lentitud administrativa es va endarrerir fins a finals de 2024 la signatura dels convenis administratius que havien de formalitzar aquesta cooperació, trobant-se encara en fase de licitació dels estudis preliminars d'aquests projectes d'obra i havent quedat desfasades les quantitats inicialment previstes a les encomanes de gestió per a la seva execució.

En un marc com l'actual, de creixent exigència i complexitat, tant en termes de reptes per davant com de solucions a adoptar, la col·laboració entre les Administracions Públiques i l'impuls d'instruments innovadors de major proximitat a la ciutadania s'erigeixen com a elements fonamentals per a la satisfacció de l'interès general. En aquest sentit, l'ordenament jurídic estableix els instruments que permeten canalitzar la col·laboració entre Administracions Públiques, permetent així la creació d'espais de decisió i gestió compartides mitjançant la constitució de personificacions instrumentals del sector públic — com els consorcis—.

Per totes aquestes consideracions, la Comissió Bilateral Generalitat-Estat del 24 de febrer de 2025 va instar a la Comissió Mixta d'Assumptes Econòmics i Fiscals a crear un grup de treball al qual s'encarregava l'anàlisi de la creació d'un consorci paritari Estat-Generalitat de Catalunya en matèria d'inversions.

Aquesta proposició de llei té per objecte accelerar la creació d'aquest consorci en matèria d'inversions, de manera que l'impuls, planificació, seguiment, gestió i execució de les principals infraestructures de l'Estat es realitzi de forma conjunta amb la Generalitat de Catalunya, i permetent una gestió d'aquestes infraestructures més àgil, més directa, més pròxima al territori i més adaptada a les necessitats dels seus habitants.

El primer pla s'atribueix al «Consorti d'Inversions de Catalunya», al qual correspon l'elaboració del Pla Pluriennal d'Inversions i dels programes que el desenvolupen, així com el seguiment, avaluació i coordinació de les actuacions inversores del sector públic estatal al territori. Es configura fonamentalment, d'aquesta manera, com un instrument de governança, direcció estratègica i supervisió.

El segon pla, referit a l'execució d'estudis, projectes, obres i altres actuacions materials, podrà encomanar-se a una Societat Mercantil integrada al sector públic empresarial estatal i participada per l'Administració General de l'Estat i la Generalitat de Catalunya. L'elecció d'aquesta fórmula respon a la necessitat de disposar d'un instrument de gestió dotat de major agilitat, flexibilitat i capacitat operativa per al desenvolupament d'actuacions d'inversió. Aquesta Societat tindrà la condició de mitjà propi personificat i servei tècnic de les administracions participants.

Considerem que, mitjançant el consorci i la societat mercantil, paritaris entre les dues administracions, a mitjà termini es poden resoldre algunes de les causes anteriorment descrites, causes que no són segurament exclusives de Catalunya, motiu pel qual la proposta que deriva d'aquesta proposició de llei pot ser replicada en altres territoris de l'Estat on es consideri oportú impulsar una iniciativa similar.

La proposta pretén en primer lloc donar compliment al requisit establert per l'article 123 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, segons el qual per a la creació de consorcis en els quals participa l'Administració General de l'Estat o els seus organismes públics i entitats vinculades o dependents es requerirà que la seva creació s'autoritzi per llei.

Article 1. *Autorització per a la constitució del «Consorti d'Inversions de Catalunya».*

S'autoritza la creació del «Consorti d'Inversions de Catalunya» per a l'impuls, la planificació, el seguiment, la gestió i l'execució de les inversions de l'Estat a Catalunya.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie B Núm. 313-1

13 de marzo de 2026

Pág. 8

Article 2. *Règim jurídic del consorci.*

El consorci que es constitueixi es regirà pel que disposa el capítol VI del títol II de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, pels seus estatuts i la resta de normes que li siguin aplicables, i li seran aplicables els criteris següents:

1. Comptarà amb la participació de l'Administració General de l'Estat, a través del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, i de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
2. Restarà adscrit a l'Administració General de l'Estat, en virtut del que disposa l'apartat 2.f) de l'article 120 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
3. Tindrà la consideració de mitjà propi d'acord amb el que disposa l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Article 3. *Funcions.*

El «Consorti d'Inversions de Catalunya», en els termes previstos als seus estatuts, exercirà, com a mínim, les funcions següents, sens perjudici de les competències atribuïdes a altres òrgans d'acord amb la normativa vigent:

- a) Elaborar el projecte de Pla Pluriennal d'Inversions de l'Estat a Catalunya, amb caràcter previ a la seva elevació al Consell de Ministres per a l'aprovació.
- b) Elaborar els projectes de programes anuals i, si escau, sectorials d'inversió mitjançant els quals es desplegui i executi el Pla Pluriennal.
- c) Dur a terme el seguiment, el control i l'avaluació de les polítiques i actuacions d'inversió de l'Administració General de l'Estat a Catalunya, en particular de les incloses als instruments de planificació previstos a les lletres anteriors.
- d) Impulsar les mesures correctores oportunes i reprogramar noves actuacions en cas que els nivells i terminis d'execució de les inversions en curs no siguin els acordats.
- e) Coordinar l'actuació de les entitats integrants del sector públic estatal, sigui quina sigui la seva naturalesa jurídica, que executin inversions de l'Estat en l'àmbit territorial de Catalunya.
- f) Participar, a través de membres del seu Consell Rector designats a aquest efecte, en els Consells d'Administració de les principals entitats estatals que executin inversions a Catalunya.
- g) Impulsar i promoure la constitució de la societat mercantil prevista a l'article 6 d'aquesta Llei, així com col·laborar en la seva posada en funcionament.
- h) Elaborar informes, estudis i propostes en matèria de planificació, programació i execució d'inversions estatals a Catalunya.

Article 4. *Règim pressupostari, de comptabilitat i de control financer.*

1. El règim pressupostari, de comptabilitat i de control del Consorci serà el que estableix la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i la seva normativa de desplegament, sens perjudici de la seva subjecció al que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. El pla comptable aplicable serà el Pla General de Comptabilitat Pública.

2. El Consorci estarà subjecte al control extern del Tribunal de Comptes i al control intern exercit per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat a través de les modalitats de control que resultin aplicables al Consorci de conformitat amb la Llei General Pressupostària.

3. El Consorci restarà sotmès a la supervisió contínua exercida pel Ministeri d'Hisenda a través de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat d'acord amb el que estableix l'article 85.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre.

Article 5. Els estatuts del consorci i la seva durada.

1. Els estatuts que aprovin els òrgans de govern de les administracions consorciades determinaran la composició, el règim d'adopció d'acords dels òrgans de govern del Consorci, el seu finançament, estructura, règim de personal i la resta de requisits legalment establerts.

2. La durada del consorci serà indefinida.

Article 6. Societat Mercantil d'Inversions de Catalunya.

1. La Societat Mercantil d'Inversions de Catalunya tindrà per objecte la realització, per encàrrec, d'estudis, la redacció de projectes, l'execució d'obres, la prestació de subministraments i serveis, així com qualsevol altra actuació material necessària per a l'execució d'inversions de l'Estat a Catalunya que li siguin encomanades per l'Administració General de l'Estat, per les entitats competents del sector públic estatal o pel Consorci d'Inversions de Catalunya.

2. La Societat tindrà la condició de mitjà propi personificat i servei tècnic de l'Administració General de l'Estat, de la resta d'entitats integrants del sector públic estatal, de la Generalitat de Catalunya i del Consorci d'Inversions de Catalunya.

3. Les relacions entre la Societat i les entitats respecte de les quals tingui la condició de mitjà propi s'articularan mitjançant els encàrrecs regulats als articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

4. El capital social pertanyerà a l'Administració General de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya, en les proporcions que es determinin als estatuts socials, tot garantint en qualsevol cas la participació majoritària del sector públic estatal i la integració de la Societat en el sector públic empresarial estatal.

5. En el moment de la seva constitució, l'Administració de l'Estat i la Generalitat de Catalunya acordaran el règim de governança de la Societat, que es desplegarà als estatuts socials i, si escau, en el corresponent pacte de socis.

Article 7. Sosteniment econòmic i finançament del Consorci i de la Societat Mercantil d'Inversions.

El sosteniment econòmic del Consorci i de la Societat Mercantil d'Inversions, així com el finançament de les seves activitats, correspondrà únicament a l'Administració General de l'Estat, sens perjudici dels ingressos derivats de les encomanes i dels encàrrecs que es formalitzin amb les entitats del sector públic estatal. A aquests efectes, correspon a l'Administració General de l'Estat efectuar les aportacions dineràries i no dineràries que escaiguin.

Disposició addicional primera. Règim d'autoritzacions.

S'autoritza el Govern perquè aprovi les disposicions que siguin necessàries per a l'efectivitat d'aquesta proposició de llei i, en especial, les que permetin al Consorci exercir funcions de coordinació de les entitats estatals que, sigui quina sigui la seva forma jurídica, duguin a terme i executin inversions a Catalunya. Així mateix, el Govern haurà d'adoptar les decisions de caràcter administratiu que siguin necessàries per al correcte funcionament del Consorci.

Disposició addicional segona. Termini de constitució.

En el termini de nou mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, haurà d'estar constituït el Consorci d'Inversions de Catalunya, que en tot cas haurà d'iniciar la seva activitat a partir de l'1 de gener de 2027.

En el termini de dotze mesos a partir de l'inici de l'activitat del Consorci, haurà d'estar constituïda la Societat Mercantil d'Inversions de Catalunya.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie B Núm. 313-1

13 de marzo de 2026

Pág. 10

Disposició adicional tercera. *Participació en entitats estatals.*

En el termini de tres mesos des de la constitució del Consorci, el Govern adoptarà les mesures necessàries per garantir la incorporació d'un representant del Consorci d'Inversions de Catalunya al Consell d'Administració de l'Entitat Pública Empresarial Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (ADIF).

Disposició final.

Aquesta proposició de llei entrarà en vigor al cap de vint dies de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat.

cve: BOCG-15-B-313-1